

Domingo fue otro motivo de fricción. El periodismo en general no dejaba de particularizar sobre estas crecientes inquietudes.

A continuación reproducimos una nota de "Primera Plana" publicada en junio del '65, una nota que con pocas variantes era reproducida por la prensa en general:

FUERZAS ARMADAS: LOS 400 GOLPES

La lista de desencuentros entre gobierno y Fuerzas Armadas, o de meras agresiones -lo que los mandos denominan "subalternización"-, se concreta en 12 acontecimientos clave:

■ El 28 de octubre de 1963 se encargó la dirección de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) al brigadier Medardo Gallardo Valdez, un sanjuanino de orientación colorada que fue interventor en Córdoba desde 1955 a 1958 (Juan Palmero desempeñó el Ministerio de Gobierno en su gabinete). Gallardo Valdez eligió como su segundo al coronel Manuel Martínez, oficial que integró el bando colorado en los sucesos de abril.

Los dos funcionarios erradicaron a los azules de la SIDE y favorecieron el repentino encumbramiento del capitán de navío Antonio Revuelto, también colorado, en la agencia noticiosa Télam, vocera de la SIDE.

■ Maniobras similares se cumplieron en Coordinación Federal y Policía Federal, organismos dependientes de Interior. De la noche a la mañana, el teniente coronel Pascual Sebastián Ulla -emparentado con Palmero- fue puesto a la cabeza de Coordinación; la sorpresa llevó al teniente coronel Samuel a entregar la llaves al ministro. En cuanto a la Policía, descontaban los mandos que se cumplirían las disposiciones según las cuales corresponde la jefatura a un oficial superior de las FF.AA. Se aceptó la renuncia del coronel Carlos Muzio y el subjefe, inspector general Nicolás J. Rodríguez, asumió interinamente la jefatura. Hasta hoy, esa situación no se modificó.

■ Otro desplante se produjo al cambiar de manos el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART) porque no se dio cabida al obligatorio representante de las Fuerzas Armadas.

■ En febrero de 1964, contrariando frescas declaraciones del ministro del Interior, el subsecretario de Defensa proclamaba las necesidades de proscribir al peronismo, Hernán Cortés, que jamás fue visto con buenos ojos por las Fuerzas Armadas había decidido no ocultar sus sentimientos colorados. Se aguardó en vano su renuncia pues la gaffe era enorme.

■ El ministro de Defensa y su colega de Economía, el doctor Eugenio Blanco advierten que los hermanan un mismo obstáculo: la Secretaría tiene tanto o más peso que ellos. Se esboza así, la reforma de la Ley de Ministerios encaminada a suprimir las secretarías. "No puedo siquiera arrestar a un sargento", se quejaba Suárez, que expuso sus ideas ante los consternados mandos. Modificada la ley, los ministros concentrarían todo el poder, servidos por simples subsecretarías. A pesar del ardor descargado por Suárez en su explicación, las FF.AA. vieron en esa tentativa -todavía no enviada al Parlamento- lo que es una espada de Damócles que, no bien aprobada, politizará a las Fuerzas Armadas.

■ El 14 de abril de 1964, el general Jorge Alvarez Spence renunció como secretario general del Ministerio de Defensa, cargo que ejercía desde noviembre de 1962. En la Casa Rosada se mencionó, para sucederlo al coronel Gustavo Eppens (colorado). Hasta hoy, sin embargo, esas funciones están vacantes, a pesar de la insistencia de los mandos en que sean cubiertas.

"Tan poco les interesan las Fuerzas Armadas -protestaba un oficial de Aeronáutica- que no se preocupan porque tengan su delegado en el Ministerio.

■ En mayo del '64, frustrados sus anhelos de regresar a la actividad, los sectores colorados inundaron el país de versiones y rumores sobre "el golpe de Estado de los generales Lanusse y Osiris Villegas". La campaña perseguía dos fines:

- 1 que el gobierno abogara por las reincorporaciones, para "tener amigos" en las Fuerzas Armadas, capaces de contrarrestar una rebelión;
- 2 desacreditar a los mandos azules. Al mismo tiempo, el matutino oficialista "Pregón" lanzaba indirectos ataques contra Onganía. "La SIDE y Télam, concluyeron los jefes castrenses, fueron los canales por donde corrió la ofensiva". Más tarde, las mismas radios oficiales se sumarían a la sibilina tarea de desprestigio. Como respuesta, las Fuerzas Armadas no sólo denuncian a Suárez la agresiva acción psicológica; se preocupan por reafirmar una vez más sus principios legalistas.

El discurso de Onganía en West Point (Estados Unidos) el 6 de agosto ante sus colegas de toda América, se inscribió en la misma línea: "La subordinación -de las FF.AA.- es debida a la autoridad del gobierno, en cuanto ésta emana de la soberanía popular... El acatamiento es debido y referido, en última instancia, a la Constitución y a las leyes -señaló el comandante del Ejército- nunca a los hombres o a los partidos políticos que circunstancialmente pudiesen detentar el poder público".

■ En octubre de 1964, el jefe de la guarnición de Resistencia, teniente coronel Jorge Castro Madero, mandó retirar un busto de Eva Perón que jóvenes partidarios del justicialismo habían emplazado en la calle. Fue el prólogo de un escándalo, de un río de reacciones; el gobierno resolvió mantener su acostumbrado silencio, aunque alentó en secreto la posibilidad de que la Cámara de Diputados votara una reprimenda contra Castro Madero, por desacato.

El Poder Ejecutivo especuló con los dos beneficios que podía obtener

- 1 que las Fuerzas Armadas -el Ejército en este caso- chocaran con el peronismo, si respaldaban a Castro Madero;
- 2 que el peronismo frenara sus ímpetus bélicos y hasta la Operación Retorno, entonces en plena ebullición, al comprobar que las Fuerzas Armadas no les eran adictas. Algo más ganaba Illia: que otros, no él, se pronunciaran acerca de un tema tan electrizante como la ubicación del peronismo en la vida nacional. El 25 de octubre, en Bahía Blanca, los periodistas preguntaron a Onganía sobre el episodio de Resistencia: "Lo que ha sucedido en la guarnición militar Resistencia es de responsabilidad del comandante en jefe. Sus componentes no han hecho otra cosa que cumplir sus instrucciones", sentenció.

■ El 17 de diciembre de 1964, el presidente convirtió en amonestación el fallo del Tribunal Superior de Honor de las FF. AA., que pedía la destitución y baja, prohibición de uso de grado y uniforme, y arresto, para el brigadier Cayo Antonio Alsina (por una violenta carta que envió al presidente Guido en setiembre del '63; un año antes, Alsina resistió su reemplazo como comandante en jefe y originó una crisis con aprestos bélicos, dentro de su arma). Es norma que los presidentes acepten o desechen estos veredictos, no que los cambien. La actitud de Illia -que demoró su decisión durante 5 meses- se sumó a las irritaciones.

■ De allí en adelante, los sucesos se precipitan vertiginosamente; las cartas del general Enrique Rauch (fueron tres y se divulgaron el 17, 21 y 22 de diciembre de 1964), en cuya gestación quiso verse la influencia de sectores oficialistas adictos al coloradismo, buscaron mellar a Onganía; el reemplazo del general Carlos Jorge Rosas, solicitado por el comandante en jefe, puso a prueba al gobierno: Illia tardó 24 horas en descubrir que era en extremo peligroso aceptar las presiones de sus amigos y colaboradores y no acceder al pedido de Onganía, salvando en cambio a Rosas. Un índice del clima imperante lo brinda este detalle: el 22 de diciembre por la tarde, el ministro Suárez anunció que el presidente había firmado a las 14.15 el decreto de reemplazo de Rosas; pero el decreto fue suscripto recién a las 17.30. Los jirones del Plan Lepra se agitaron

detrás de este acontecimiento; la demora del Poder Ejecutivo, la defensa de Rosas asumida por la UCRP, constituían un ataque contra Onganía. Claro que el arma del ataque era un boomerang si el gobierno se deshacía de Onganía, ¿mantendría su propia estabilidad? Según Alvaro Alsogaray, ese 22 de diciembre el PE estuvo a punto de caer.

Los ascensos de fin de año fueron aceptados por el presidente y el Senado, ocho horas antes de la ceremonia de entrega de sables que los simboliza, pero el Poder Ejecutivo incluyó dos nombres, por su cuenta, en las promociones a generales de división: Caro y Villegas. El siguiente motivo de fricción lo proporcionan los sueldos, que Leopoldo Suárez prometió ajustar y elevar no bien pasaran las elecciones del 14 de marzo. Fue un arduo conflicto, de dilatada tramitación: los aumentos, por fin, comenzaron a regir desde el 1° de mayo pasado, aunque a fin de mes sólo se cobró el 60% del 40% convenido (un incremento práctico del 23%). Y antes de que sobreviniera el problema dominicano, los mandos de Ejército se enteraban de que el canciller ofrecía al general Rosas la embajada en Brasil, una manera de perpetuarlo en la actividad e impedir que la secretaría de Guerra pudiera pasarlo a retiro.

En cuanto al caso Santo Domingo, "es el más alevoso manoseo del gobierno", lo calificó un alto oficial. Como es notorio, el descontento de los militares proviene no sólo de la indecisión sobre el envío de tropas o de la supremacía alcanzada por Brasil (uno de cuyos generales comanda la Fuerza Interamericana). Sucede que el PE pidió opinión a las FF.AA., las FF.AA. la entregaron y el PE la despreció.

"Después de lo de Santo Domingo, difícilmente haya un militar en actividad con fe en el gobierno", resumió un general. Y es cierto, los altos mandos reconocen que todos los puentes de contacto quedaron destruidos y que la crónica de sus relaciones con el Poder Ejecutivo debe dividirse en antes y después de Santo Domingo.

Toda esperanza, toda simpatía, se evaporó; la frialdad y la inquietud las sustituyeron.

Así llegaron las autoridades castrenses a Olivos, el 21 de este mes. El vacío no se restañó en las cinco horas de conversaciones, y como si hubiera pocos motivos de desgaste, el mismo 12, no bien retirados los jefes militares, el presidente Illia recibía al teniente general Arturo Ossorio Arana y al canciller; era para proponerle la embajada en Paraguay. El ex ministro de Guerra declinó la oferta "porque no se ha resuelto la situación de los oficiales retirados y yo me siento, en parte responsable porque los alenté".

"Le pido que medite y acepte", habría contestado Illia. "Nosotros también los alentamos, pero tenemos el deber de gobernar y lo hacemos, pese a ésa y otras situaciones".

Si como simbolizó un militar la semana pasada, es cierto que "dejamos al gobierno librado a su propia suerte", no es menos cierto que las Fuerzas Armadas seguirán observando con sensible atención todos los pasos del Poder Ejecutivo. Quizá logren así actualizar y asentar el balance de críticas que formulan a la administración Illia, balance que no incluye -al menos no se sabe que incluya- una sola cuenta positiva. Este es un resumen de las principales objeciones:

-La conducción económica: Subsisten todos los defectos y vicios que hallaron los gobernantes, al asumir el 12 de octubre de 1963.

-El gobierno paralelo: Excesiva gravitación de Balbín y el partido.

-Falta de conducción política en los órdenes interno e internacional: Santo Domingo es el mejor ejemplo del último rubro; del primero,

recuerdan las actitudes "inhábiles" del gobierno ante el Flan de Lucha de la CGT, la Operación Retorno -es obvio que las FF.AA. se oponen al regreso de Perón- o las sinuosidades en el manejo de la cuestión peronista; y, además, el revés de marzo.

-Inercia legislativa.

-Divisiones en el elenco ejecutivo y en la UCRP, con sus desagradables reflejos en las sucesivas crisis provinciales, o la reciente "rebelión" de los senadores.

-El antinorteamericanismo de ciertos funcionarios importantes.

-El control de las radios y la televisión.

-Los cargos sin cubrir.

-El deficiente Servicio Exterior de la Nación, o "turismo estatal", como algunos lo llaman, burlesco.

-La "demagogia petrolera". Si los altos mandos no aprueban la política de Arturo Frondizi, tampoco lo hacen con la de Arturo Illia.

-Improvisación y falta de organicidad y planeamiento en la acción de gobierno. "El Poder Ejecutivo cumple una función partidista, no nacional", sostienen.

-Falta de decoro. Se refieren a los vaivenes y capitulaciones de miembros del gabinete y las mezquindades de comité.

-Tratamiento dado a las Fuerzas Armadas.

Uno de los símbolos de ese tratamiento es el ministro de Defensa, el 16 de octubre de 1963 formuló ante los periodistas una de sus típicas expresiones de deseo: "Aquí se acabaron los problemas desde el 7 de julio", pronosticó refiriéndose a las Fuerzas Armadas, que entonces compartían igual anhelo.

Pero el tiempo y la conducta del gobierno disolvieron los buenos augurios de Suárez, él mismo, considerado con cierto beneplácito por los mandos, durante algunos meses, hoy sólo obtiene el respeto jerárquico de los militares; al cabo de veinte meses de desgastes y vacilaciones, terminó deteriorado.

La conducta del gobierno, además, fructificó en otro de los poderes: el Legislativo; ya en octubre

de 1963, un diputado de la UCRP -Eduardo H. Vacarezza- se sumó a la guerra contra el equipo azul al presentar el primer proyecto concreto sobre reincorporación de oficiales colorados. Legisladores de otros seis partidos lo imitaron, pero ninguna de esas iniciativas prosperó (hay inclusive, una elevada al Senado). No obstante, un año después de la asunción de Illia, volvió a la carga su correligionario Juan Antonio Fiol, diputado por Córdoba y ex funcionario de la intervención Gallardo Valdez. A pesar de los rápidos esfuerzos de Fiol, el proyecto también naufragó.

Suárez había ido muy lejos en su profecía; los problemas no concluyeron el 7 de julio.

A pesar de todo, desde los mayores niveles -Illia, Perette, Suárez- se insiste en que la paz y la confianza mutua reinan entre el gobierno y Fuerzas Armadas, quizá porque arrecian los rumores sobre sediciones y conjuras, con un volumen jamás experimentado con la actual administración.

Las versiones crecen no sólo porque el descontento invade a otros significativos sectores de la Argentina.

Que el Poder Ejecutivo se alarma por esta atmósfera "golpista" es más que evidente; menos evidentes son las soluciones que procura. Sin dejar de anotar que dentro de la UCRP hay quienes postulan precisamente lo contrario, es decir excitar el golpe, quizá en 1967, la UCRP sea vencida nuevamente por el peronismo -piensan- y entonces más vale el desalojo por la fuerza de las armas que por la fuerza de las urnas.

Es lo que sostiene un documento enviado desde el bloque de senadores oficialistas al presidente Illia, y que todavía asombra a los mandos militares. Los comicios del '67 sumen al gobierno en el temor, con la vista puesta en ellos el PE manejó el caso dominicano.

Un periodista del diario "Tribuna", de Olavarría, Buenos Aires, mantuvo este diálogo con el general Onganía, en visita de inspección por la zona.

"- ¿Habrá elecciones en 1967 o golpe de Estado?"

- Le contestaría si tuviera una bola de cristal..."

A falta del mágico implemento, las Fuerzas Armadas estudian el panorama. La semana última, mientras la calle inventaba no menos de seis revoluciones listas para estallar, los Sondeos revelaron que en superficie no hay inminencia de golpe. Más aún: algunas fuentes consultadas repitieron que si el gobierno sale del atolladero será mejor para las propias Fuerzas Armadas.

Un oficial de Aeronáutica acudió a una metáfora: "En cada viaje, el piloto pasa por el período crítico de vuelo; es cuando decide si debe continuar o regresar. Si decide continuar, no puede volver atrás y viceversa.

Nosotros estamos ahora en el período crítico de vuelo". ¿Y el instante de decisión? "Nadie quiso fijarse fecha".

Sin embargo, si no surge algún inesperado detonante, los resultados del '67 tienen que ver con el "período crítico de vuelo". Estiman los militares que triunfará el peronismo y que el gobierno, de no encontrar una salida coherente, quizás anule los comicios o interponga proscripciones previas. Si se anulan, la historia argentina regresará a marzo de 1962, si hay proscripciones, a 1955. Y los militares esperan que los acontecimientos no los lleven a 1930, 1943, 1955 ó 1962, pues "es el país el que retorna hacia atrás".

Los críticos de las Fuerzas Armadas suelen decir que si el equipo azul derribara al doctor Illia, ese acto entrañaría el fracaso del legalismo. Los mandos responden que hay fracaso cuando hay accionar, pero que las Fuerzas Armadas no tuvieron participación -ni tienen- en el actual gobierno. Los comunicados 150 y 200, bases de su filosofía, señalan que debe haber "incidencia"

La semana última, mientras la calle inventaba no menos de seis revoluciones listas para estallar, los Sondeos revelaron que en superficie no hay inminencia de golpe. Más aún: algunas fuentes consultadas repitieron que si el gobierno sale del atolladero será mejor para las propias Fuerzas Armadas.

de las FF.AA. en el gobierno, en cuanto a los objetivos nacionales.

Lógicamente -explican- esta incidencia deben desarrollarla los secretarios ya que los comandantes en jefe quedan al margen. Pero los secretarios militares no interpretan a sus respectivas armas, una incomunicación nacida de su inconsulto nombramiento. Los secretarios se convierten así en figuras decorativas, que no viven las ansias y el proceso de sus pares. Si el fracaso existe entonces es del gobierno.

Trece años separaron la revolución que derrocó a Yrigoyen de la que acabó con Castillo; doce corrieron entre ésta última y la que destronó a Perón; seis y medio desde ésta a la que eliminó a Frondizi. Los plazos fueron acortándose, ¿será una circunstancia fortuita o una ley?

Mientras se anulaban contratos petroleros y se desafiaba al Banco Mundial al violar el acuerdo sobre tarifas de la empresa SEGBA, una pareja de funcionarios -el presidente del Banco Central, Félix Elizalde y el secretario técnico del CONADE, Roque Carranza- recorrían Nueva York, Washington, Ginebra, Bonn, Londres, Roma y París, asegurando que "el país se recupera, no devaluará su moneda, no establecerá control de cambios y no renegociará su deuda".

De regreso, Elizalde declaraba: "Fuimos a informar que la deuda será pagada en los plazos establecidos y nos recibieron bien. ¿A qué acreedor le disgusta que le aseguren el pago de las deudas?"

A ninguno, por supuesto. Pero el recuerdo de la promesa les irrita, cuando trece meses después, el mismo gobierno envía a otras personas a decir lo contrario: "Necesitamos una prórroga de los vencimientos del año en curso y el siguiente, para salir de nuestros apremios". Este fue el papel desairado que en los últimos cincuenta días debió cumplir el secretario de Hacienda, Carlos A. García Tudero, desandando el camino de la euforia.

Salvo el Banco Mundial, ningún acreedor aceptó las fórmulas de refinanciación elevadas por la delegación argentina.

El memorándum de la propuesta argentina había sido laboriosamente preparado por el experto Julio González del Solar -ex vicepresidente del Banco Central y participante en varias de estas gestiones- tratando de conciliar las esperanzas desproporcionadas de las autoridades argentinas con las modalidades y el lenguaje de los acreedores.

Las escasas recepciones tributadas a los argentinos en Europa no habían alcanzado a disimular el enojo de los acreedores.

Las presiones de García Tudero no surtieron efecto, un memorándum comentaba que: "El gobierno argentino, ha expresado reiteradamente la necesidad de que el programa de refinanciación comience a actuar no más tarde del 1Q de julio de 1965. Una de las razones que apoyan este criterio es el hecho de que en el primer trimestre y lo que va del segundo ya se han efectuado pagos sustanciales a costa de una fuerte caída de reservas, que si no se recuperan en los próximos meses del año provocarán una muy difícil situación".

Para entonces, los funcionarios argentinos parecían dispuestos a transigir sobre la base de la contrapropuesta del Club: trasladar el pago de 114 millones de dólares de la deuda de 1965 a 1968, dejando sin refinanciar 76 millones de dólares de ese año y los 190 millones del año siguiente; el período de gracia, por otra parte, debería acortarse de los 5 años solicitados a sólo 2. Ya antes, se habían obtenido satisfacciones parciales en las negociaciones con el FMI y el conjunto de bancos europeos y de USA contra sólo un acuerdo total con el Banco Mundial.

Todo era válido. Un dirigente nacionalista había dicho que: "El golpe será contra el peronismo, pero se dará como excusa la presencia comunista". He aquí las reacciones:

1 la entidad empresaria ACIEL condenó la infiltración marxista en la Universidad;

2 el economista Walter Beveraggi Allende, a quien Perón privó de la ciudadanía argentina, interpuso un recurso de amparo para que no se lo involucre en las opiniones del Consejo Superior Universitario contrarias a la intervención norteamericana en Santo Domingo (él es profesor en Ciencias Económicas);

3 el senador nacional Celestino Gelsi denunció en un violento alegato la existencia de comunistas en el servicio diplomático argentino;

4 según una versión, el tema habría sido considerado por el Episcopado Nacional, que cerró sus deliberaciones a mediodía del Sábado.

Pero si en el campo político el gobierno se mantenía estacionario, la política interfería una vez más en la solución técnica de los problemas económicos; por motivaciones políticas se frenaron los aumentos de las tarifas eléctricas, ya facturados por SEGBA, y de la carne. El fin de las gestiones ante el Club de París dejó un magro saldo y, en consecuencia, se tornaba necesario revisar una vez más el Plan de Desarrollo que entraba en su tercera versión.

Si la partida a Europa del comandante en jefe del Ejército pareció desmentir versiones, la proximidad de su regreso comenzó a coincidir con una revitalización de las alarmas sobre conspiraciones.

En numerosos medios políticos se barajaba esa posibilidad, ciertos dirigentes conservadores preconizaban la llegada de un golpe, no se sabe si como certeza porque disponen de información precisa o como simple expresión de deseos.

Dos líderes conservadores de Buenos Aires sostenían que no hay militares peronistas -aunque ellos y sus correligionarios alguna vez divulgaron esa especie en la que jamás creyeron-, no hay militares frentistas; por lo tanto, carece de sentido pensar en un golpe militar-peronista ni militar-frentista. Admiten a regañadientes que no habrá un golpe antijudicialista, pues los cuadros no descartan la eventualidad de tener que gobernar en determinado momento, y no quieren privarse del apoyo popular: porque no se puede lanzar un ataque contra la legalidad legitimada en 1963, de la cual es heredero el ingreso del peronismo en la ruta del poder, y porque la revolución del '55 y la del 1962 terminaron agotadas, vencidas por falta de sustentación. Los no peronistas y aún los antiperonistas ya no podían ignorar que el peronismo significaba "algo" en la Argentina, y ese "algo" tenía tal magnitud que sin él no se podía gobernar.

Según los dirigentes conservadores, el golpe saldrá a defender el orden y restaurar la economía, únicas formas de concitar el respaldo popular, por lo menos en el instante inicial.

Sin embargo, reconocen que éste es un planteo teórico, que para concretarse requiere un jefe y un equipo. Pero no es descabellado pensar que se produzca una coyuntura económica favorable a estos planes, antes de 1967. Y si no, ahí están las elecciones de gobernadores como un revulsivo para las Fuerzas Armadas.

Difícil que el peronismo, aún en sus formas más suaves, acceda a las urnas entonces; antes, habrá golpe con pretextos ajenos a la política. En las secretarías y unidades militares, el sustantivo golpe tampoco deja de flotar sobre las gorras de los oficiales.

Una frase que se oye cada vez con mayor insistencia aclara este concepto un tanto difuso. "No custodiaremos comicios que luego nos veríamos obligados a anular". ¿Es un pedido de proscripción peronista?

Para el ministro de Defensa, las nubes son producto de la imaginación o la intriga. Concorre al Liceo Naval y afirma: "Las Fuerzas Armadas son parte de nuestro pueblo, y por eso debemos

Dos líderes conservadores de Buenos Aires sostenían que no hay militares peronistas - aunque ellos y sus correligionarios alguna vez divulgaron esa especie en la que jamás creyeron-, no hay militares frentistas; por lo tanto, carece de sentido pensar en un golpe militar-peronista ni militar-frentista.

Fue menos retórico al comentar: "Ningún general, ningún almirante, con su sueldo, podrá ser el propietario de una estancia en Buenos Aires".

Un rótulo militar, "conducción por tramos hacia la victoria", consiste en esencia, en aplicar sucesivos golpes al sistema de gobierno, y plantearle profundas alternativas y contradicciones internas, para luego hallar con él, por vía del avance o la negociación, alguna salida.

Así ocurrió en siete momentos cruciales, por lo menos:

-En 1956, el sindicalismo aceptó el desafío de la "Revolución Libertadora" y concurrió a elecciones gremiales; triunfó y los adictos a la Revolución debieron quebrar el quórum en el congreso de la CGT para detener a los peronistas, que formaron las 62 Organizaciones con el resto.

-En 1958, los peronistas dieron la victoria a Arturo Frondizi, el candidato a quien no respaldaba la Casa Rosada; contra él declararon la huelga revolucionaria en 1959, porque se negó a cumplir con las directivas peronistas. Frigerio reconoce que Frondizi, privado del apoyo justicialista, se vio constreñido a recurrir a Alsogaray. Pero ese mismo año, había legalizado la situación del peronismo en los gremios mediante la Ley de Asociaciones Profesionales; la CGT le fue entregada en 1960.

-En 1962, el peronismo forzó con su triunfo comicial el golpe militar que derribó a Frondizi.

En 1963, el poder militar estaba tan atomizado que un sector del Ejército simuló buscar la solución junto al peronismo.

-En 1964, la ortodoxia peronista abatió sobre el gobierno una ofensiva que duró un año: la del retorno de Perón. El justicialismo se constituyó en un gran partido, desmintiendo las profecías anunciadoras de su disolución. El gobierno tuvo que mantener sus promesas de permitir la concurrencia del peronismo a las elecciones ante la amenaza de la subversión obrera que hubiese significado el golpe militar.

El 14 de marzo de 1965, tornó a vencer.

Así ocurre también ahora, con vistas a los comicios del '67. Para entonces, los observadores estiman que:

- 1** el régimen decide aceptar al peronismo en la urna y quizá, cederle una porción ejecutiva del poder,
- 2** el régimen proscribió al peronismo, ó
- 3** una revolución castrense anula las posibilidades del peronismo, mantiene el régimen pero termina con el gobierno de la UCRP.

De estas alternativas, que el justicialismo baraja constantemente, se descarta de intentar la posibilidad de una sublevación guerrillera, acaudillada por el peronismo: "Argentina por su conformación geográfica y su naturaleza social no se presta para ser cabeza de una lucha armada, sí pueden hacerlo Bolivia, Perú o Brasil", explica un teórico. "Pero nuestro movimiento debe ser el tronco de la guerra revolucionaria cuando estalle". Por este motivo, porque la verdadera hipótesis de trabajo que el peronismo ha formulado como alternativa al gobierno; que se defina frente a los comicios de 1967, tiene el sabor de una coyuntura revolucionaria.

Sucede que hasta tanto el gobierno no se defina será necesario reunir tras el peronismo a todos los sectores populares. La condición parece indispensable cuando se prevé un par de situaciones. Si el gobierno proscribió al justicialismo, hará falta que todos los partidos populares se abstengan en señal de protesta. Si hubiera un solo partido en la legalidad serviría para canalizar la opción de los votantes peronistas y filo-peronistas, como ocurrió con la UCRI en 1955. Así, se retardaría por lo menos hasta 1970 una próxima etapa de avance.

El terreno lógico -o ideal- para concertar tales alianzas es el Parlamento, las Legislaturas y los Concejos Deliberantes. De tal forma, la buena letra, es apenas una técnica destinada a encubrir la alternativa revolucionaria que quedó planteada al gobierno; su necesidad de definirse antes del '67.

EL PODER SINDICAL

A partir del 14 de marzo pasado, el poderío gremial se había manifestado claramente superior al de los otros sectores peronistas. Los líderes sindicales se empeñaron en reunir junto a sí a las minorías justicialistas provinciales y aún a todas las minorías antioficialistas. Para triunfar, si les autorizaban el paso hacia los comicios en 1967 y 1969, para luchar, si un golpe militar los detenía; y, fundamentalmente, para provocar ahora mismo, con la presencia unida de sus aliados, la definición oficial acerca de la concurrencia a elecciones en 1967, el reconocimiento de la legalidad que los devuelva sin angustias a la vida cívica.

Desde las FF.AA. se utilizaban todos los medios a su alcance para advertir al peronismo y fundamentalmente al sector sindical, que ellos -las FF.AA.- no tolerarían que el peronismo llegase al gobierno a través de las urnas.

El gobierno a través del subsecretario de Seguridad Social, Enrique Rabinovitz, preparó una iniciativa para reformar el régimen previsional que el ministro de Trabajo quiere enviar al Parlamento bajo la forma del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional.

Representantes del sector empresario de los llamados gremios independientes han sido consultados con el fin de conocer la reacción que provocaría ese proyecto. El mayor problema gira alrededor de la edad mínima para jubilaciones: el Ministerio pretende fijarla en los 60 años, es decir, cinco menos que la establecida por la mayoría de las Cajas. Fuentes sindicales anticiparon que tal modificación es capaz de desatar duras controversias.

Si bien se guarda una estricta reserva sobre otros aspectos de la iniciativa, lo cierto es que el gobierno trata de que le sirva como arma electoral.